

La alternancia frustrada *

Santos Juliá

Quizá nadie haya expresado mejor el estado el ánimo de socialistas y populares vascos, el domingo 13 de mayo a las 11 de la noche, que la alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, cuando comentaba con estas palabras el resultado de las elecciones: "Esa esperanza que teníamos y las expectativas de cambio, la sensación de que íbamos a poder respirar mejor y andar por la calle con más libertad se esfumaron en la noche del domingo". La conclusión: "No pudo ser y sólo cabe aguantar más tiempo así".

Es difícil intentar un análisis de las últimas elecciones celebradas en Euskadi sin entender las razones del estado de ánimo que embargaba aquel domingo por la noche a los representantes del 40 por ciento de sus ciudadanos. Un sentimiento ante todo de expectativa frustrada, sin parangón con el que pueda experimentar cualquier partido tras unos adversos resultados electorales. En el País Vasco, la frustración de las expectativas de los partidos que hicieron de la defensa de la Constitución y del Estatuto lema central de sus campaña, no obedece sólo a cuestiones relacionadas con el poder sino a la convicción de que la vida va a seguir igual que antes, como en un infierno. Las elecciones, por lo general, no cambian a nadie la vida, sólo cambian, cuando lo hacen, al gobierno. Pero en éstas, la expectativa consistía en vivir de otra manera, en aquello que Ana Urchueguía definía como andar por la calle con más libertad. Los representantes políticos no nacionalistas no saben -o han olvidado- en qué consiste andar por la calle en libertad.

Esa frustración, que tiene que ver con el destino personal de cada cual y con la suerte de la comunidad a la que se representa, se ahonda todavía más en una especie de sentimiento de abandono por la mayoría. En efecto, y como también decía la alcaldesa de Lasarte, una parte de la sociedad ha preferido mirar hacia otro lado. Ocurre que esa parte de la sociedad es la mayoría, que en esta ocasión ha salido consolidada de las urnas y, por tanto, reforzada en sus convicciones y en su mundo de valores que antepone la identidad nacional a los derechos individuales. No hay ningún motivo para esperar que una mayoría, por muy relativa que sea, si se siente reforzada por las urnas proceda a la crítica de su política anterior; esperar que algo iba a cambiar en la política de los vencedores no era precisamente el sentimiento dominante entre los derrotados durante la noche electoral; más bien ocurría lo contrario. De ahí, la

* Publicado en *El Noticiero de las Ideas*, 7 (julio-septiembre 2001) pp. 46-52.

desazón que implicaba esa especie de resignación ante un destino impuesto: aguantar más tiempo así.

Los sentimientos de frustración y de soledad o abandono, junto a la decisión de aguantar sin razonables perspectivas de cambio, fueron tanto más agudos cuanto más se había creído que esta vez la alternancia estaba al alcance de la mano. No era, como se ha dicho, una quimera sin fundamento alguno en la realidad social. De hecho, la distancia entre los votos recogidos por partidos nacionalistas y por partidos de ámbito estatal no había dejado de reducirse desde mediados de los años ochenta. En esa reducción, una parte sustancial se debía a los progresos del Partido Popular, que había roto sucesivamente las barreras de los cien, doscientos y, finalmente, trescientos mil votantes. Cabía, desde luego, la sospecha de que hubiera llegado al límite de sus posibilidades o de que, si seguía creciendo, lo hiciera a costa del voto socialista, sin grandes alteraciones del conjunto. Pero eso era una sospecha matizada por la duda razonable de lo que fuera a votar la enorme proporción de ciudadanos que no sabían o no contestaban cuando se les preguntaba por su intención de voto. No era un ejercicio de autoengaño esperar que de esa masa de votantes, una buena parte, si votaba, iría a engrosar las filas de los partidos de ámbito estatal.

La cuestión, entonces, radicaba en qué hacer para animar a esos electores que se presumía indecisos o proclives a la abstención a salir de su pasividad y encaminarse a las urnas. No hizo falta rebuscar mucho para formular una propuesta: consolidar lo avanzado desde comienzos de los años noventa y progresar movilizando a los indecisos sólo sería posible si se ofrecía una alternativa creíble al gobierno nacionalista. Para eso se requería, ante todo, defender como algo perfectamente normal y legítimo en democracia la sustitución de una mayoría parlamentaria por otra y proclamar la voluntad de desplazar del gobierno a la coalición PNV-EA. Como, por otra parte, ni el PP ni el PSOE, cada cual por su lado, dándose la espalda o tratándose como adversarios, podrían alcanzar nunca esa meta, era preciso una especie de pacto de no agresión entre ambos partidos que pudiera transformarse en un pacto positivo de defensa de una política en la que la libertad y la lucha antiterrorista ocuparan el primer plano.

Decisión de sustituir a la coalición nacionalista en el gobierno y firma de un pacto por la libertad y contra el terrorismo: esos fueron los dos pasos previos a las elecciones, debidos a partes iguales al PP y al PSE. Propuestas coherentes, que por sí mismas despertaron la expectativa de que esta vez era posible, si no alcanzar la mayoría absoluta, al menos rozarla, de manera que resultara impensable un gobierno sin participación de los partidos de ámbito estatal. Lo significativo fue, con todo, que los pasos que PP y PSE iban dando para la formulación de una política común se acompañaron de un despertar de los ciudadanos que venían sufriendo una grave merma de sus libertades y derechos. La salida a la calle de diversas plataformas no partidarias, en las que se podían encontrar votantes de diferentes partidos, y la pelea por el espacio público emprendida por significados intelectuales y profesores universitarios, lograron impulsar un movimiento de opinión y romper la espiral del silencio en que la mayoría nacionalista, identificada por boca de sus dirigentes con los fines de ETA aun si cuidadosa de afirmar la diferencia de medios, había encerrado a la minoría.

Esta política de pacto entre PP y PSE y el correlativo resurgir ciudadano vinieron impregnados de un elemento inevitablemente reactivo frente al nacionalismo. Desde el verano de 1998, el acuerdo secreto sellado por la coalición PNV-EA con ETA había servido de base a la creación de un frente nacionalista entre PNV-EA y Euskal Erritarrok, con el aditamento irrelevante a efectos prácticos de EB/IU. El texto de los acuerdos con ETA y el pacto de Estella señalaban como objetivo principal la exclusión de los partidos popular y socialista a los que se calificaba de enemigos de la construcción nacional de Euskadi. La formación de este frente nacionalista introducía un elemento de polarización en la política vasca trazando una nítida línea divisoria entre las fuerzas políticas que perseguían la secesión de Euskadi del Estado español y quienes enarbolaban la defensa de la Constitución y del Estatuto como elementos centrales de su programa político. El sistema de partidos vasco, cruzado por la doble línea izquierda / derecha y nacionalismo / constitucionalismo, con PNV y PSE ocupando tradicionalmente las posiciones centrales, quedó dividido en dos: de un lado, los nacionalistas, embarcados en una marcha hacia la secesión; en otro, los constitucionalistas, reafirmando la vigencia del Estatuto.

En tales circunstancias, poca opción quedaba a los partidos constitucionalistas más que plantear la pugna electoral de frente y a por todas. Mientras la violencia callejera iba en aumento, ante la pasividad impuesta desde la Consejería de Interior a la Ertzaintza, y mientras ETA volvía a asesinar selectivamente a periodistas independientes y a concejales y dirigentes del PP y PSOE, la movilización ciudadana mostraba que la agresión de que eran objeto los no nacionalistas y la impunidad de que gozaban sus agresores había alcanzado cotas difícilmente soportables. Reforzar la voluntad de ese sector, ofrecer motivos para resistir y razones para aguantar exigía no sólo dirigir el discurso contra ETA y sus cómplices más directos sino denunciar también la pasividad, la connivencia, el mirar hacia otro lado, la equidistancia de la que tantas muestras habían dado los nacionalistas llamados moderados o demócratas. Si el nacionalismo planteó desde 1998 su estrategia como un frente, ninguna oportunidad política quedaba para que quienes eran arrojados a la marginación y a la exclusión lanzaran puentes hacia el nacionalismo. Tender un puente es una operación que sólo tiene sentido si en la otra orilla existe un terreno firme donde colocar algún pivote de sustentación. No era el caso.

Esta política reactiva se ha calificado como intento de demonizar y satanizar al PNV. Un nacionalista tan dialogante como Joseba Arregi, que nunca ha utilizado el zafio y belicoso lenguaje de Arzalluz e incluso se ha mostrado crítico de la línea oficial emprendida por su partido, ha tildado el combate contra el crimen terrorista emprendido por intelectuales y comentaristas como una mera excusa para declarar la "guerra al infiel". Cruzada, reconquista, resurgimiento de un nacionalismo españolista centralizador, neofranquismo, cuando no retorno del fascismo español que se habría propuesto laminar al nacionalismo, han sido algunas de las cosas escritas por nacionalistas moderados, y por comentaristas cercanos, sobre la política de pacto entre PP y PSOE y su campaña electoral. Naturalmente, a toro pasado, y con los resultados de las elecciones en las pantallas de televisión, la tentación era irresistible: la razón del triunfo de la coalición PNV-EA y de la derrota de los constitucionalistas habría radicado precisamente en esa política de polarización con la que los agredidos habían tenido la audacia

de responder a los agresores y a la política de exclusión acordada por el conjunto del nacionalismo en el verano del 1998.

¿Ha sido así? Y, ante todo ¿ha sido tan apabullante el triunfo del nacionalismo, tan abrumadora la derrota de los constitucionalistas? La respuesta a estas preguntas depende de cómo se interprete, cuando se conozca su dimensión exacta y sus motivos, el trasvase de votos de Euskal Erritarrok a la coalición PNV-EA, clave del triunfo nacionalista y nota más destacada de estas elecciones. Para una interpretación provisional será necesario recordar algunas magnitudes. En relación con las elecciones de 1998, el número total de votantes se ha incrementado esta vez en unos 155.000. Si se prescinde de EB/IU, que a pesar de su desbordante euforia, se ha quedado prácticamente como estaba -5,6 por ciento en 1998, una décima menos en 2001-, ese aumento de votos, atribuible a una mayor participación más que al incremento del censo, ha beneficiado ligeramente a los partidos de ámbito estatal, y de ellos, más al PP que al PSOE, que alcanzaron juntos por vez primera el 40 por ciento de los votos válidos. La coalición PNV-EA subió del 36,6 por ciento obtenido por ambos en 1998 al 42,7 conseguido ahora, pero el de los partidos nacionalistas en su conjunto -la coalición PNV-EA más EH- bajó del 54,5 de 1998 al 52,8 de 2001. La única interpretación posible de esas dos magnitudes es, primero, que en la pugna por los nuevos votantes, la coalición PNV-EA ha quedado en segunda posición, a poca distancia del conjunto formado por PP y PSOE y, segundo, que la razón del triunfo de PNV-EA radica en el trasvase de votos recibido desde dentro del mismo campo nacionalista, no en la ampliación de este campo.

De modo que, si no se hubiera producido esa masiva transferencia de votos, los escaños que hubieran conseguido PP y PSOE con los mismos votos obtenidos el 13 de mayo habrían sido algunos más, con detrimento de los alcanzados por PNV-EA. La clave, por tanto, de la nueva distribución de escaños con el inesperado ascenso de la coalición nacionalista de 27 a 33 y el decepcionante -para las expectativas acariciadas- avance de los constitucionalistas de 30 a 32 se debería íntegramente a la nueva distribución de fuerzas dentro del campo nacionalista con un incremento de PNV-EA que no llega a compensar la pérdida de votos y escaños de EH. Este es el dato fundamental de estas elecciones. ¿Ha sido motivada esa transferencia de votos por la sensación de miedo ante el posible triunfo de PP-PSOE o lo ha sido más bien por el rechazo de la actividad criminal de ETA? Planteado de otra forma: esos 81.000 votantes que han abandonado a EH (que serán algunos más pues también habrá recibido alguna porción de los que acudían a las urnas por vez primera) y que en una considerable proporción se han ido al PNV-EA ¿lo han hecho movidos por la decisión de levantar un dique a la "cruzada" del PP y PSOE o porque querían transmitir a ETA el mensaje de que abandonara las pistolas?

Sin suficientes elementos para dilucidar esta cuestión -más importante de lo que parece pues de la respuesta dependerá si se trata o no de votos prestados y en qué medida- lo cierto es que estas elecciones han mostrado, ante todo, la escasa, por no decir nula, volatilidad del voto vasco si por tal concepto se entiende la transferencia desde el campo nacionalista al constitucionalista o viceversa: son dos campos cuya distancia se estrecha, pero que conservan barreras poco porosas. La adscripción de los electores es, por tanto, muy alta a su campo, su fidelidad de voto dentro del mismo campo

prácticamente inmovible y su anclaje ideológico o identitario muy firme. Es posible que una campaña electoral en la que se prodigaron las inútilmente agresivas intervenciones del presidente del Gobierno haya favorecido un cierre de filas; pero esa no parece la causa principal del triunfo de PNV-EA; de hecho, el porcentaje de votos nacionalistas ha bajado dos puntos. Lo que explica el resultado no es una ampliación del campo nacionalista atribuible al miedo a una agresión exterior sino una nueva redistribución de sus espacios debida a movimientos de opinión internos: ni la campaña electoral ni los asesinatos de ETA han modificado la relación entre los nacionalistas y los constitucionalistas; pero sí han motivado a muchos electores a transferir votos de la izquierda a la derecha dentro del ámbito nacionalistas.

De esa nula volatilidad entre campos se deriva, en primer lugar, el límite de crecimiento, muy difícil de romper, de los partidos de ámbito estatal y, en consecuencia, la frustración de la alternancia. La hipótesis de la que estos partidos partían se ha revelado parcialmente falsa, por más que estuviera sostenida en múltiples estudios de opinión. En las bolsas de abstención, por donde pensaban crecer gracias a una campaña muy movilizadora, no había más voto oculto para estos partidos que para los nacionalistas. Probablemente, pues, los partidos de ámbito estatal han recogido ya todo el voto posible, poniendo así término al espectacular crecimiento del PP durante los últimos años. De hecho, el número total de votos recogido ahora por el PP, aunque superior en la no desdeñable cifra de 56.000 al de las elecciones autonómicas de 1998, es idéntico al conseguido en las legislativas de 2000, mientras que el PSOE ha perdido quince mil respecto a los obtenidos hace un año. Los progresos futuros serán, si ocurren, lentos; insuficientes, en todo caso, para pensar a corto plazo en una mayoría alternativa. Tal es la dura lección que los partidos de ámbito estatal deben sacar de los resultados del 13 de mayo en lo que a ellos les concierne: sin contar con IU, han llegado al 40 por ciento del voto; será difícil que pasen de ahí si no se produce un derrumbe o una escisión del nacionalismo moderado.

Pero la nula volatilidad entre campos no se repite dentro de cada campo. En el de los partidos de ámbito estatal, tanto PP como PSOE han crecido en relación con la anteriores elecciones autonómicas: 30.000 votos más los socialistas; 56.000 más los populares, un incremento que puede explicarse íntegramente -a la espera de datos más refinados- por el aumento de participación y por los que acudían por vez primera a las urnas, es decir, sin necesidad de postular una transferencia significativa de votos del PSE al PP. En el campo nacionalista, sin embargo, el realineamiento ha sido espectacular: EH pierde 80.000 votantes, y pasa del 18 al 10 por ciento, mientras la suma PNV-EA gana 140.000 y pasa del 36,6 al 42,7. Con esas, la coalición PNV-EA no sólo consolida su posición como primera fuerza política de un sistema de partidos pluralista sino que reafirma su hegemonía dentro del campo nacionalista, sacando ahora más de treinta puntos porcentuales a EH cuando en 1998 sólo le separaban 18. Si en número de votos PNV-EA duplicaba en 1998 los obtenidos por EH, ahora, en 2001, los cuadriplica. La distancia ha aumentado de forma nítida, considerable.

Es ese realineamiento dentro del campo nacionalista lo que ha permitido a la coalición PNV-EA obtener un escaño más que la suma de los conseguidos por los firmantes del pacto por la libertad y contra el terrorismo, PP y PSOE. Un escaño más, en un sistema que prima al primer llegado no es un triunfo

arrollador, no es el resultado de un *landslide*, de un corrimiento a favor de PNV-EA, aunque así pudiera parecer por el desaliento que embargó a los perdedores y la euforia de la que se dejaron llevar los vencedores durante la noche electoral. Pero si un escaño en términos numéricos es cantidad casi desdeñable, en términos simbólicos, y en esta ocasión, equivalía a un precioso capital, difícilmente mensurable. El valor simbólico del escaño tenía que ver, naturalmente, con las expectativas de cada cual que podrían resumirse diciendo que todo lo que no fuera quedar por encima de PNV-EA era, para los constitucionalistas, una derrota, mientras que para los nacionalistas el simple hecho de no dejarse superar era una gran victoria. Así se sintió aquella noche en los cuarteles generales de los respectivos partidos.

Eso era así para ambos porque lo que estaba en juego en estas elecciones era la alternancia en el gobierno, que los constitucionalistas consideraban como puerta necesaria para cambiar de vida mientras los nacionalistas temían como la pérdida de una propiedad que por derecho, o por la fuerza de las cosas, les pertenecía. Quieren quitarnos lo nuestro, clamaba Arzalluz, con el sentido patrimonial de las instituciones vascas que caracteriza al PNV. En estas condiciones, llegar aunque no fuera más que con un escaño por delante a la meta tenía una importancia dramática, tanto mayor cuanto que, además, los primeros estaban convencidos, o se convencieron a fuerza de voluntad, de que llegar vencedores era posible, mientras los segundos vieron por vez primera que su largo dominio de Ajuria Enea con todo lo que eso significa de manejo de presupuesto, redes clientelares, funcionarios adictos, familiares colocados, poder en la administración y presencia en la sociedad, podía desvanecerse. Al final, el capital simbólico se resolvió por el estrecho margen de 300 votos, una razón más para la melancolía de la parte de los perdedores, de la euforia en casa de los vencedores.

La frustración de la alternancia o, lo que viene a ser lo mismo, la continuidad de la coalición PNV-EA al frente del gobierno ¿quiere decir que se ha frustrado también cualquier posibilidad de cambio en la política vasca? Para responder a esta cuestión no es suficiente con formular buenos deseos, ni repetir el monocorde discurso del diálogo, diálogo, diálogo, ni reiterar esas patéticos ruegos a ETA o recordarle que la sociedad quiere tal o cual cosa, o sea, seguir tratando a ETA como buenos chicos descarriados. Sin duda, algo ha cambiado con el sólo hecho de celebrarse las elecciones: el nuevo gobierno ya no deberá su origen a un inicuo pacto con los representantes políticos de una banda criminal; la oposición no podrá, aunque lo quisiera, bloquear la acción de gobierno y hacer aprobar por el parlamento iniciativas propias; Euskal Herritarrok ya no tendrá en sus manos la posibilidad de condicionar al lehendakari. Por no hablar, claro está, de la relajación del clima de enfrentamiento y del fin de la dura confrontación debida al larguísimo forcejeo por conseguir la disolución de la Cámara y a la no menos prolongada campaña electoral. Celebradas las elecciones, y contados votos y escaños, un lenguaje de moderación y de espera ha sustituido al duro lenguaje de enfrentamiento y descalificación.

Están por tanto dadas las condiciones para un nuevo arranque político y hasta para una nueva política. La coalición PNV-EA puede gobernar sin temor a derrotas parlamentarias ante lo que en adelante será ya muy improbable voto unánime PP-PSE y sin sentirse condicionado por EH: tiene ahora la manos más libres que nunca, menos necesitadas de apoyo y menos condicionadas

por cualquier otra fuerza política. Con el adorno que siempre supone para los nacionalistas contar con EB/IU, a la que ahora tendrán que satisfacer con alguna consejería de segundo o tercer rango, la coalición PNV-EA está en excelentes condiciones, aun si no cuenta con mayoría absoluta, para gobernar insuflando nuevos aires a su política. Esa nueva política podría restaurar los puentes volados por la política frentista y restablecer un acuerdo entre demócratas con el propósito de acabar con ETA como primer paso para emprender luego el diálogo de todavía incierto contenido y método del que siempre habla el lehandakari Ibarretxe.

¿Lo va a hacer? Las primeras iniciativas tomadas por Juan José Ibarretxe parecen apuntar en esa dirección. Aun si nunca ha dicho que entre los propósitos de su gobierno ocupe un lugar principal acabar con ETA, aun si después de cada atentado nunca dice que empleará todos los medios a su alcance para perseguir y llevar ante la justicia a los culpables, Ibarretxe se ha comprometido al menos a no gobernar con el apoyo de EH. En realidad, dada la situación en que ha quedado la oposición, no lo necesita. No gobernar con el apoyo de EH ni admitir a esta formación a una futura mesa de negociación si antes no denuncia la violencia y rompe ataduras con ETA, tiene cierto valor moral, pero no implica por sí mismo ningún compromiso político y policial respecto a ETA ni una mayor firmeza en relación con la violencia callejera.

Hasta que no llegue el momento de las iniciativas prácticas, de las concretas medidas de gobierno, será imposible saber cuales son las verdaderas intenciones ni la capacidad de control que el lehandakari pueda ejercer sobre la política de su partido. De momento, el consejero de Interior no ha podido evitar manifestar un pensamiento que debe de rondar en muchas cabezas: un partido que sale reforzado de las urnas no tiene por qué proceder a una crítica que le obligue a un cambio significativo de política. Se podría temer algo más: en un tiempo y en una sociedad en que la política de fines impera sobre la política de principios, nada hay en el horizonte que obligue ni recomiende al PNV-EA a proceder a un cambio en relación con esa mitad minoritaria de la sociedad vasca.

Pues, en definitiva, lo que han demostrado estas elecciones es que la persistencia de la acción criminal de ETA no sólo no afecta en nada a los apoyos sociales de la coalición PNV-EA sino que los refuerza en la misma medida en que motivan la transferencia de votos del abertzalismo radical al moderado... y todavía quedan 150.000 votos que transferir. Si la campaña electoral de PP-PSE radicalizó la oposición al conjunto del nacionalismo, la del PNV-EA se dirigió a atraer el voto abertzale acentuando su política de autodeterminación y soberanismo. Ahora, con los resultados de esa política contantes y sonantes, muchos entre los nacionalistas no deben de ver razón alguna, que no fuera de índole moral, para cambiar. Pero, como se ha repetido irresponsablemente durante la semana postelectoral, una cosa son los fines, otra los medios; una cosa es el compromiso moral, otra la acción política. Si este argumento -en el que no se sabe qué admirar más, si el cinismo o la trivialidad- prevaleciera, la alternancia frustrada significaría también la frustración del cambio y la consolidación en Euskadi de dos comunidades enfrentadas.